

ACUERDO ENTRE
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Y
EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE POLONIA
PARA LA PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES

El Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República de Polonia, denominadas en adelante las Partes Contratantes,

Con el deseo de intensificar la cooperación económica entre ambos países,

Con el propósito de crear condiciones favorables para las inversiones de los inversores de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante, y

Reconociendo que la promoción y la protección de esas inversiones sobre la base de un Acuerdo estimularán las iniciativas comerciales en ese campo.

Han convenido lo siguiente:

Artículo 1

A los fines del presente Acuerdo:

1. El termino "inversión" designa, de conformidad con la legislación y disposiciones de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión, todo tipo de activo invertido por inversores de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante, de acuerdo a la legislación de ésta, e incluye en particular, pero no exclusivamente:

a) la propiedad de bienes muebles e inmuebles y demás derechos reales, como hipotecas y derechos de prenda;

b) acciones, derechos de participación en sociedades y otros tipos de participaciones en sociedades;

c) títulos y derechos a prestaciones que tengan un valor económico;

d) derechos de propiedad intelectual como, en especial, derechos de autor, patentes, diseños y modelos industriales, marcas, nombres comerciales, procedimientos técnicos, know how y valor ilave;

2. el termino "inversor" designa:

a) toda persona física que tenga la nacionalidad de una de las Partes Contratantes, de conformidad con su legislación:

b) toda persona jurídica, incluyendo sociedades, organizaciones y asociaciones, constituida o incorporada de cualquier otro modo de conformidad con la legislación vigente en cualquiera de las Partes Contratantes, y que tenga su sede social y actividades económicas reales en el territorio de dicha Parte Contratante;

c) toda persona jurídica establecida de conformidad con la legislación de cualquier país que esté efectivamente controlada por nacionales de esa Parte Contratante o por personas jurídicas que tengan su sede y actividades económicas reales en el territorio de dicha Parte Contratante.

3. Para los fines de este Acuerdo una persona física o sociedad será considerada como detentadora del control de una sociedad o de una inversión, si dicha persona o sociedad tiene un interés sustancial y la capacidad de ejercer una influencia decisiva sobre la sociedad o la inversión. Cualquier divergencia surgida de este Acuerdo vinculada al control de una sociedad o de una inversión será resuelta por las Partes Contratantes por medio de consultas.

4. Las disposiciones de este Acuerdo no serán aplicadas a las inversiones realizadas por personas físicas nacionales de una Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante si dichas personas, en el momento de la inversión, estuvieran domiciliadas en esta Parte Contratante por más de dos años, a menos que se pudiera probar que la inversión original fue admitida en su territorio desde el extranjero.

5. El término "ganancias" designa las sumas obtenidas de una inversión, tales como las participaciones en los beneficios, los dividendos, los intereses, los derechos de licencia u otras remuneraciones.

6. El término "territorio" designa el territorio nacional de las Partes Contratantes incluyendo las zonas marítimas adyacentes al límite exterior del mar territorial del territorio nacional, sobre el cual cada Parte Contratante pueda, de conformidad con el derecho internacional, ejercer derechos soberanos o jurisdicción.

Artículo 2

1. Cada Parte Contratante promoverá en su territorio las inversiones realizadas por inversores de la otra Parte Contratante y admitirá estas inversiones conforme a su legislación.

2. El presente Acuerdo será aplicable a las inversiones realizadas por inversores de una de las Partes Contratantes en el territorio de la otra Parte Contratante, conforme con sus

leyes y reglamentos, a partir del 1ro. de enero de 1990.

3. Este Acuerdo no será aplicable a las controversias o litigios surgidos con anterioridad a la entrada en vigencia del mismo.

Artículo 3

1. Cada Parte Contratante asegurará en todo momento un tratamiento justo y equitativo a las inversiones efectuadas por inversores de la otra Parte Contratante y no perjudicará la gestión, mantenimiento, uso, goce o venta de las mismas ni la adquisición de bienes y servicios y venta de su producción a través de medidas injustificadas o discriminatorias.

2. Cada Parte Contratante concederá plena protección legal a las inversiones realizadas en su territorio por inversores de la otra Parte Contratante y acordará a dichas inversiones un tratamiento no menos favorable que el que se conceda a las inversiones realizadas por sus nacionales o por inversores de terceros Estados. Esta disposición se aplicará también a los beneficios derivados de las inversiones.

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 2do. de este artículo, el trato de la nación más favorecida no será aplicable a los privilegios que las Partes Contratantes acuerden a inversores de un tercer Estado a causa de su membrecía o asociación a un área de libre comercio, unión aduanera, mercado común u organización para la asistencia económica mutua.

4. Las disposiciones del Párrafo (2) del presente artículo no serán interpretadas en el sentido de obligar a una Parte Contratante a extender a los inversores de la otra Parte Contratante el beneficio de cualquier tratamiento, preferencia o privilegio que resulte de algún acuerdo o arreglo internacional relativo, total o parcialmente, a materia impositiva o acordados sobre una base de reciprocidad.

5. Las disposiciones del Párrafo (2) de este artículo no serán interpretadas en el sentido de extender a inversores de la otra Parte Contratante, el beneficio de cualquier tratamiento, preferencia o privilegio derivados de acuerdos bilaterales que comporten un financiamiento concesional, como los concluidos por la República Argentina con Italia el 10 de diciembre de 1987 y con España el 3 de junio de 1988.

Artículo 4

1. Ninguna de las Partes Contratantes tomará medidas de nacionalización o expropiación ni ninguna otra medida que tenga

el mismo efecto contra las inversiones que se encuentran en su territorio y que pertenezcan a inversores de la otra Parte Contratante, a menos que dichas medidas sean tomadas en el interés público y con el debido proceso legal. Las medidas incluirán disposiciones para el pago de una pronta, adecuada y efectiva indemnización. Dicha indemnización será equivalente al valor de mercado existente antes de la expropiación de la inversión, o antes que la expropiación pendiente tomara público conocimiento, e incluirá los intereses desde la fecha de la expropiación y será libremente transferible.

2. Los inversores de la Parte Contratante cuyas inversiones hayan sufrido pérdidas en el territorio de la otra Parte Contratante por causas de guerra u otro conflicto armado, estado de emergencia nacional, revolución o rebelión, serán beneficiados por esta última con un tratamiento no menos favorable que el acordado a sus nacionales o a inversores de un tercer Estado, en lo que respecta a restituciones, compensaciones u otras prestaciones susceptibles de ser valuadas. Dichos pagos serán, en la medida de lo posible, transferidos sin demora.

Artículo 5

1. Cada Parte Contratante garantizará la transferencia irrestricta de:

a) el capital y aportes adicionales para el mantenimiento o desarrollo de las inversiones;

b) las ganancias, intereses, dividendos y otros ingresos corrientes;

c) los fondos para el pago de préstamos genuinamente contraídos, regularmente documentados y directamente vinculados con una inversión específica;

d) las regalías y honorarios;

e) el producto de la liquidación total o parcial de la inversión;

f) las indemnizaciones previstas en el artículo 4.

g) las remuneraciones de los nacionales de una Parte Contratante autorizados para trabajar con relación a una inversión admitida en el territorio de la otra Parte Contratante.

2. Las transferencias aludidas precedentemente se efectuarán sin demora en divisas libremente convertibles al tipo de cambio normal aplicable a la fecha de la transferencia, conforme con

los procedimientos previstos por la legislación de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión, que no implicarán denegar, suspender o desnaturalizar la libre transferencia.

Artículo 6

1. Si una Parte Contratante o una de sus agencias realizara un pago a un inversor en virtud de una garantía o seguro que hubiera contratado en relación a una inversión, la otra Parte Contratante reconocerá la validez de la subrogación a todo derecho o título del inversor en favor de aquella Parte Contratante o agencia.

Aquella Parte Contratante o agencia que se subrogue en los derechos de un inversor tendrá los mismos derechos de este último y, en la medida que ejerzan tales derechos, lo harán sujetos a las obligaciones del inversor relacionadas con dicha inversión asegurada.

2. En el caso de subrogación, como es definido en Párrafo 1 de este artículo, el inversor no efectuará reclamo alguno a menos que sea autorizado a efectuarlo por la Parte Contratante o agencia.

Artículo 7

Si las disposiciones de la legislación de cualquier Parte Contratante o las obligaciones de derecho internacional ya existentes o que se establezcan en el futuro entre las Partes Contratantes en adición al presente Acuerdo o un acuerdo entre un inversor de una Parte Contratante y la otra Parte Contratante contienen normas, ya sean generales o específicas, que otorgan a las inversiones realizadas por inversores de la otra Parte Contratante un trato más favorable que el que se establece en el presente Acuerdo, aquellas normas prevalecerán sobre el presente Acuerdo en la medida que sean más favorables.

Artículo 8

Cualquiera de las Partes Contratantes puede proponer a la otra Parte que se hagan consultas sobre todo asunto relativo a la interpretación o aplicación del presente Acuerdo. La otra Parte acordará una especial consideración a la propuesta, creando las condiciones adecuadas para que esta consulta se realice.

Artículo 9

1. Cualquier controversia entre las Partes Contratantes relativa a la interpretación o aplicación del presente Acuerdo será, en lo posible, resuelta por los gobiernos de ambas Partes Contratantes por medio de la negociación.

2. Si la controversia no ha podido ser resuelta dentro de los seis meses contados a partir de la iniciación de las negociaciones, ésta será sometida, a solicitud de cualquiera de las Partes Contratantes, a un tribunal arbitral.

3. El tribunal arbitral se constituirá para cada caso, designando cada Parte Contratante a un árbitro. Estos dos árbitros propondrán de común acuerdo a un nacional de un tercer Estado como Presidente, el que será designado por los gobiernos de ambas Partes Contratantes. Los árbitros serán designados en el término de tres meses, y el Presidente en cinco meses, a partir de la fecha en que una de las Partes Contratantes comunicó a la otra Parte Contratante de su deseo de someter la disputa a un tribunal arbitral.

4. Si los plazos previstos en el Párrafo 3 de este artículo no fueran observados y a falta de otro arreglo, una u otra Parte Contratante invitará al Secretario General de las Naciones Unidas a proceder a los nombramientos necesarios. Si el Secretario General fuera nacional de una de las Partes Contratantes o se encontrara impedido de hacerlo por alguna otra causa, el Secretario General Adjunto más antiguo que no posea la nacionalidad de ninguna de las Partes Contratantes, procederá a efectuar las designaciones necesarias.

5. El tribunal arbitral determinará su propio procedimiento.

6. El tribunal arbitral tomará su decisión por mayoría de votos. Esta decisión será definitiva y obligatoria para las Partes.

7. Cada Parte Contratante asumirá el costo del árbitro que ha nombrado y de su representación. El costo del presidente así como los otros costos en que se haya incurrido serán solventados por partes iguales por las Partes Contratantes.

Artículo 10

1. Toda controversia relativa a las inversiones, en los términos del presente Acuerdo, entre una Parte Contratante y un inversor de la otra Parte Contratante será, en la medida de lo posible, solucionada por consultas amistosas entre las dos partes en la controversia.

2. Si la controversia no hubiera podido ser solucionada en

el término de seis meses a partir del momento en que hubiera sido planteada por una u otra de las Partes. será sometida, a pedido del inversor:

- o bien a las jurisdicciones nacionales de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión.

- o bien al arbitraje internacional en las condiciones descriptas en el Párrafo 3.

Una vez que un inversor haya sometido la controversia a las jurisdicciones de la Parte Contratante implicada o al arbitraje internacional la elección de uno u otro de esos procedimientos será definitiva.

3. En caso de recurso al arbitraje internacional, la controversia podrá ser llevada ante uno de los órganos de arbitraje designados a continuación, a elección del inversor:

- al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (C.I.A.D.I.), creado por el "Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados", abierto a la firma en Washington el 18 de marzo de 1965, cuando cada Estado Parte en el presente Acuerdo haya adherido a aquél. Mientras esta condición no se cumpla, cada Parte Contratante da su consentimiento para que la controversia sea sometida al arbitraje conforme con el reglamento del Mecanismo complementario del C.I.A.D.I.;

- a un tribunal de arbitraje "ad-hoc" establecido de acuerdo con las reglas de arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (C.N.U.D.M.I.).

4. El órgano arbitral decidirá en base de las disposiciones del presente Acuerdo, al derecho de la Parte Contratante que sea parte en la controversia -incluidas las normas relativas a conflictos de leyes- y a los términos de eventuales acuerdos particulares concluidos con relación a la inversión como así también a los principios del derecho internacional en la materia.

5. Las sentencias arbitrales serán definitivas y obligatorias para las partes en la controversia. Cada Parte Contratante las ejecutará conforme a sus respectivas legislaciones.

Artículo 11


1. El presente Acuerdo entrará en vigor el primer día del segundo mes a partir de la fecha en que las Partes Contratantes se notifiquen entre ellas por escrito que han cumplimentado los

respectivos requisitos constitucionales para la entrada en vigor de este Acuerdo. Su validez será de diez años. Luego permanecerá en vigor hasta la expiración de un plazo de doce meses a partir de la fecha en que alguna de las Partes Contratantes notifique a la otra Parte Contratante su decisión de dar por terminado este Acuerdo.

2. Con relación a aquellas inversiones hechas antes de la fecha de terminación de este Acuerdo, los artículos 1 a 10 continuarán en vigencia por un período de 10 años a partir de esa fecha.

En fe de lo cual los infrascriptos, debidamente autorizados a tal efecto por sus respectivos Gobiernos, han firmado el presente Acuerdo.

Hecho en Buenos Aires, el 31 de julio de 1991, en dos originales en los idiomas español, polaco e inglés, siendo los tres textos igualmente auténticos. En caso de surgir alguna divergencia de interpretación de las disposiciones, prevalecerá el texto inglés.



POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA ARGENTINA



POR EL GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE POLONIA

AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ARGENTINE REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF POLAND
ON THE PROMOTION AND RECIPROCAL PROTECTION OF INVESTMENTS

The Government of the Argentine Republic and the Government of the Republic of Poland, hereinafter referred to as "the Contracting Parties",

Desiring to intensify economic cooperation between both countries

Aiming at creating favourable conditions for investments by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party,

Recognizing that the promotion and protection of such investments on the basis of an agreement stimulates business initiatives in this field,

Have agreed as follows:

Article 1

For the purposes of this Agreement:

(1) The term "investment" means, in conformity with the laws and regulations of the Contracting Party in whose territory the investment is made, every kind of asset invested by an investor of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, in accordance with the latter's laws. It includes in particular, though not exclusively:

(a) movable and immovable property as well as any other property rights, such as mortgages and pledges;

(b) shares, stocks and any other kind of participation in companies;

(c) title to money and claims to performance having an economic value;

(d) intellectual property rights including in particular copyrights, patents, industrial designs, trademarks, trade names, technical processes, know-how and goodwill;

(2) The term "investor" shall mean:

(a) any natural person who is a national of a Contracting Party in accordance with its laws;

(b) any legal person, including companies, organizations, associations, constituted or incorporated in other way under the law in force in either Contracting Party and having its seat and substantial economic activities in the territory of that Contracting Party; and

(c) any legal person established under the law in force in any country, effectively controlled by natural persons of that Contracting Party or by legal persons having their seat and substantial economic activities in the territory of that Contracting Party.

(3) For the purpose of this Agreement a natural person or company shall be regarded as controlling a company or an investment if the person or company has a substantial interest in and the ability to exercise a decisive influence over the company or investment. Any question arising out of this Agreement concerning the control of a company or an investment shall be resolved to the satisfaction of the Contracting Parties by consultation.

(4) The provisions of this Agreement shall not apply to the investments made by natural persons who are nationals of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party if such persons have, at the time of the investment, been domiciled in the latter Contracting Party for more than 2 years, unless it is proved that the original investment was admitted into its territory from abroad.

(5) The term "returns" means all amounts yielded by an investment such as profits, dividends, interest, royalties and other income.

(6) The term "territory" shall mean the national territory of either Contracting Party including those maritime areas adjacent to the outer limit of the territorial sea of the national territory, over which the Contracting Party concerned may, in accordance with international law, exercise sovereign rights or jurisdiction.

Article 2

(1) Each Contracting Party shall promote in its territory investments by investors of the other Contracting Party and shall admit such investments in accordance with its legislation.

(2) This Agreement shall apply to investments made by investors of one Contracting Party in the territory of the

other Contracting Party in accordance with its laws and regulations from the 1st. of January 1990.

(3) This Agreement shall not apply to any dispute or difference which arose before its entry into force.

Article 3

(1) Each Contracting Party shall at all times ensure fair and equitable treatment of the investments by investors of the other Contracting Party and shall not impair the management, maintenance, use, enjoyment or disposal thereof, as well as the acquisition of goods and services and the sale of its production, through unjustified or discriminatory measures.

(2) Each Contracting Party shall grant full legal protection to investments in its territory by investors of the other Contracting Party and shall accord to such investments a treatment which is no less favourable than that accorded to investments by its own investors or by investors of third States. This provision shall also apply to the returns yielded by investments.

(3) Notwithstanding the provisions of Paragraph (2) of this Article, the treatment of the most favoured nation shall not apply to privileges which either Contracting Party accords to investors of a third State because of its membership in, or association with a free trade area, customs union, common market or organization for mutual economic assistance.

(4) The provisions of Paragraph (2) of this Article shall not be construed so as to oblige one Contracting Party to extend to investors of the other Contracting Party the benefit of any treatment, preference or privilege resulting from any international agreement or arrangement relating wholly or mainly to taxation or accorded on a reciprocity basis.

(5) The provisions of Paragraph (2) of this Article shall neither be construed so as to extend to investors of the other Contracting Party the benefit of any treatment, preference or privilege resulting from the bilateral agreements providing for concessional financing concluded by the Republic of Argentina with Italy on 10 December 1987 and with Spain on 3rd. June 1988.

Article 4

(1) Neither of the Contracting Parties shall take any measure of nationalization or expropriation or any other measure having the same effect against investments in its territory belonging to investors of the other Contracting Party, unless the measures are taken in the public interest

and under due process of law. The measures are accompanied by provisions for the payment of prompt, adequate and effective compensation. Such compensation shall amount to the market value of the expropriated investment immediately before the expropriation or before the impending expropriation became public knowledge, shall include interest from the date of expropriation and be freely transferable.

(2) Investors of either Contracting Party who suffer losses of their investments in the territory of the other Contracting Party due to war or other armed conflict, a state of national emergency, revolt, insurrection or riot shall be accorded, with respect to restitution, indemnification, compensation or other settlement, a treatment which is no less favourable than that accorded to its own investors or to investors of any third State. Resulting payments shall, whenever possible, be transferable without delay.

Article 5

(1) Each Contracting Party shall allow the unrestricted transfer of:

(a) the capital and additional sums necessary for the maintenance and development of the investment;

(b) gains, profits, interests, dividends and other current income;

(c) funds in repayment of loans regularly contracted and documented and directly related to a specific investment;

(d) royalties and fees;

(e) the proceeds from a total or partial liquidation of an investment;

(f) compensations provided for in article 4;

(g) the earnings of nationals of one Contracting Party who are allowed to work in connection with an investment in the territory of the other.

(2) Transfers shall be effected without delay in freely convertible currency in the normal applicable exchange rate at the date of the transfer, in accordance with the procedures established by the Contracting Party in whose territory the investment was made, which shall not imply a rejection, a suspension or denaturalization of such transfer.

Article 6

(1) If a Contracting Party or any agency thereof makes a payment to any of its investors under a guarantee or insurance it has contracted in respect of an investment, the other Contracting Party shall recognize the validity of the subrogation in favor of the former Contracting Party or agency thereof to any right or title held by the investor.

The Contracting Party or any agency thereof which is subrogated in the rights of an investor shall be entitled to the same rights as those of the investor and to the extent that they exercise such rights they shall do so subject to the obligations of the investor pertaining to such insured investment.

(2) In the case of subrogation as defined in paragraph 1 above, the investor shall not pursue a claim unless authorized to do so by the Contracting Party or any agency thereof.

Article 7

If the provision of law of either Contracting Party or obligations under international law existing at present or established hereafter between the Contracting Parties in addition to the present Agreement or if any agreement between an investor of one Contracting Party and the other Contracting Party contain rules, whether general or specific entitling investments by investors of the other Contracting Party to a treatment more favourable than is provided for the present Agreement, such rules shall to the extent that they are more favourable prevail over the present Agreement.

Article 8

Either Contracting Party may propose the other Party to consult on any matter concerning the interpretation or application of the Agreement. The other Party shall accord sympathetic consideration to and shall afford adequate opportunity for such consultation.

Article 9

(1) Any dispute between the Contracting Parties concerning the interpretation or application of this Agreement shall, if possible, be settled by negotiations between the Governments of the Contracting Parties.

(2) If the dispute cannot thus be settled within six months following the date on which the negotiations have been engaged, it shall at the request of either Contracting Party be

submitted to an arbitration tribunal.

(3) The arbitration tribunal shall be set up from case to case, each Contracting Party appointing one member. These two members shall then agree upon a national of a third State as their chairman, to be appointed by the Governments of the two Contracting Parties. The members shall be appointed within three months, and the chairman within five months, from the date either Contracting Party has advised the other Contracting Party of its wish to submit the dispute to an arbitration tribunal.

(4) If the time limits referred to in Paragraph (3) of this Article have not been complied with, either Contracting Party may, in the absence of any other relevant arrangement, invite the Secretary General of the United Nations to make the necessary appointments. If the Secretary General is prevented from discharging the function provided for in Paragraph (4) of this Article or is a national of either Contracting Party, the most senior Assistant Secretary General who is not a national of either Contracting Party shall be invited to make the necessary appointments.

(5) The arbitration tribunal shall determine its own procedure.

(6) The arbitration tribunal shall reach its decision by a majority of votes, the decision being final and binding on the Contracting Parties.

(7) Each Contracting Party shall bear the cost of the member appointed by that Contracting Party as well as the costs for its representation in the arbitration proceedings; the cost of the chairman as well as any other costs shall be borne in equal parts by the two Contracting Parties.

Article 10

1. Any dispute which arises within the terms of this Agreement concerning an investment between an investor of one Contracting Party and the other Contracting Party shall, if possible, be settled amicably.

2. If the dispute cannot thus be settled within six months following the date on which the dispute has been raised by either party, it may be submitted, upon request of the investor, either to:

- the competent tribunal of the Contracting Party in whose territory the investment was made;

- international arbitration according to the

provisions of Paragraph (3).

Where an investor has submitted a dispute to the aforementioned competent tribunal of the Contracting Party where the investment had been made or to international arbitration, this choice shall be final.

(3) In case of international arbitration, the dispute shall be submitted, at the investor's choice, either to:

- The International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) created by the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States opened for signature in Washington on 18 March 1965, once both Contracting Parties herein become members thereof. As far as this provision is not complied with, each Contracting Party consents that the dispute be submitted to arbitration under the regulations of the ICSID Additional Facility for the Administration of Conciliation, Arbitration and Fact-Finding Proceedings; or

- an arbitration tribunal set up from case to case in accordance with the Arbitration Rules of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).

(4) The arbitration tribunal shall decide in accordance with the provisions of this Agreement, the laws of the Contracting Party involved in the dispute, including its rules on conflict of law, the terms of any specific agreement concluded in relation to such an investment and the relevant principles of international law.

(5) The arbitral decisions shall be final and binding for the parties in the dispute. Each Contracting Party shall execute them in accordance with its laws.

Article 11

(1) This Agreement shall enter into force on the first day of the second month following the date on which the Contracting Parties shall notify each other in writing that their constitutional requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled. It shall remain in force for a period of 10 years. Thereafter it shall remain in force until the expiration of twelve months from the date that either Contracting Party in writing notifies the other Contracting Party of its decision to terminate this Agreement.

(2) In respect of investments made prior to the date when the notice of termination of this Agreement becomes effective, the provisions of Articles 1 to 10 shall remain in force for a further period of ten years from that date.

In witness whereof the undersigned, duly authorized to this effect, have signed this Agreement.

Done at Buenos Aires on the 31st. day of July 1991 in duplicate in the Polish, Spanish, and English languages, the three texts being equally authentic. In case there is any divergence of interpretation of the provisions, the English text shall, however, prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
ARGENTINE REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF POLAND

A stylized signature consisting of a vertical line on the left, a horizontal line across the middle, and a short horizontal line at the bottom right.A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Tymoteusz Kubiśnewski".